

# Pemex y los GOBIERNOS NEOLIBERALES\*

ALBERTO TORRENTERA\*\*

“Desde 1982, la Nación mexicana ha sufrido embates, agravios y menosprecio a sus garantías y derechos individuales, ocasionando inestabilidad social, ya que la delincuencia y el desempleo se han generalizado, al mismo tiempo que los salarios se deterioran, la pobreza se incrementa, el Estado se desmantela y la soberanía nacional se entrega a manos extranjeras” (Decelis, 2005:10), afirman un grupo de académicos y especialistas en petroquímica, en un par de documentos presentados, en 2005 y 2006, al presidente de la República, los precandidatos a la presidencia, y a la opinión pública nacional. ¿Por qué indicar

los albores de la década de los ochenta del pasado siglo? Porque fue con el sexenio encabezado por Miguel de la Madrid cuando comenzaron a aplicarse las medidas económicas neoliberales que le dieron un giro a la vida nacional, orientada después de la Revolución, en lo económico, en la convivencia de la propiedad privada en diversos sectores y de la propiedad estatal en las principales industrias y servicios públicos. Con las políticas neoliberales se ha llevado a cabo el denominado “adelgazamiento del Estado”, lo cual implica que éste pierda casi totalmente su participación como agente económico, así como sus obligaciones de seguridad social.

En los sexenios transcurridos desde 1982, cuyas administraciones fueron encabezadas, sucesivamente, por De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo y Fox, el crecimiento promedio, medido por el Producto Interno Bruto (PIB), fue de 1.58%, que resulta muy discreto en comparación con el ritmo de crecimiento que se mantenía en periodos anteriores, alrededor del 6.5%. A las condiciones de escaso crecimiento económico y

el impacto que tiene en la vida cotidiana de la población, es necesario añadir el desempleo que se ha generado en los años de neoliberalismo y el decrecimiento de los salarios reales; esta situación ha agudizado la distribución inequitativa de la riqueza del país: “En México, en estos años, los ricos son más ricos, súper ricos, y los pobres, más pobres, y en mayor número, de modo tal que tenemos más billonarios en dólares que Inglaterra, Francia e Italia juntos, y ellos tienen un PIB diez veces más grande que el de México” (Decelis, 2006:4). No debemos olvidar, por otra parte, que en estos años la difícil situación ha obligado a que 10 millones de mexicanos hayan tenido que abandonar el país, la mayoría de ellos con el riesgo vital que significa cruzar la frontera norte, para obtener los recursos necesarios para el sustento de su familia. “Este cambio de proyecto de nación se dio por la aceptación de convenios firmados con organismos internacionales, cuya adecuación a los mismos requería de cambios constitucionales para integrar a nuestro país a un ‘Nuevo

\* Las citas del texto provienen de los trabajos: *Opinión de los académicos sobre la necesidad de tener una política energética de Estado congruente a un país petrolero como es el nuestro*, de septiembre de 2005, y de otro intitulado: *A los candidatos a la presidencia de la república, Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Campa Cifrián, Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo Pintado, Patricia Mercado y al pueblo de México* de 2006, ambos firmados por investigadores y académicos especialistas en el área petroquímica; siendo responsable Rafael Decelis Contreras. La selección de las notas, el orden de las mismas y los párrafos que no remiten a citas directas, fueron redactadas por el autor.

\*\* Profesor de la UOM.

Orden Mundial” (Decelis, 2006: 2); estos convenios, que afectan directamente el desarrollo del país, son: el ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN), el Acuerdo Marco con Estados Unidos de América, y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte; con todos ellos se han estrechado las relaciones económicas con los mecanismos internacionales de financiamiento, en general, y con los vaivenes de la economía estadounidense en particular, hasta convertirse en una dependencia cada vez mayor. A partir de la política neoliberal “el país se paralizó. Los gobiernos bajaron el gasto en la infraestructura y lo poco que se hace lo realizan empresas extranjeras, bajo un procedimiento llamado ‘llave en mano’, mediante el cual importan no sólo el material, sino también la mano de obra” (Decelis, 2006:4); de este modo, no es el Estado solamente el que ha perdido su hegemonía sobre el proceso de las inversiones y de la producción, este proceso también repercute negativamente en muchos capitalistas mexicanos.

En términos generales, los acuerdos mencionados anteriormente, en los cuales se involucran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como el capital norteamericano, han provocado que la economía nacional haya cambiado esencialmente su fisonomía, de poseer un carácter expansivo y dinámico, que implicaba un relativo crecimiento, así como la posesión nacional de las principales industrias estratégicas,

a uno de carácter restrictivo y paralizante, que ha mermado seriamente la calidad de vida de los mexicanos; el cambio implica, además, que el Estado deje de ser el rector de la política económica, lo cual incluye la privatización, consumada o en vías de llevarse a efecto, de las paraestatales, aun las de carácter estratégico, entre ellas las comunicaciones o el sector energético. Como muestra un botón: el Convenio Marco, firmado en el sexenio de Ernesto Zedillo, dice, “entre otros asuntos, lo siguiente: ‘El sistema financiero se privatizará’, ‘se privatizará el

*Las presiones para privatizar Pemex se deben no a la eventual quiebra de la empresa, sino a su capacidad de generación de riqueza, la cual es codiciada por empresarios extranjeros...*

sector eléctrico’, ‘Pemex venderá 14,000 millones de activos, refinerías y petroquímicas’, ‘los acreedores del Fobaproa serán protegidos y no pagarán impuestos’”, (Decelis, 2006:5). La privatización en todos los órdenes de la vida económica de las naciones es uno de los puntos clave en los lineamientos que imponen las elites económicas con el llamado Consenso de Washington, desde el inicio de la década de los noventa.

Los políticos que han encabezado las decisiones en los últimos cuatro sexenios en los principales

puestos de la administración pública, son personas identificadas plenamente con las teorías y prácticas neoliberales; muchos de ellos han estudiado en las universidades norteamericanas. Cabe señalar que la estrecha relación con Estados Unidos y el intento de copia de su modo de producción capitalista no es, seguramente, una casualidad. Desde hace varias décadas, uno de los objetivos de la política norteamericana fue encontrar el modo del sometimiento velado, seguro y estable, de México a sus intereses geopolíticos y económicos. Esto se nota claramente cuando, en 1924, el entonces Secretario de Gobierno de Estados Unidos declaró: “México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar a un solo hombre, el presidente de la República. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo: debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades, y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes, y finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor, y más radicalmente, que nosotros” (Decelis, 2005:4).

Esta doble presión, la ejercida por los capitales representados por los mecanismos internacionales y de países extranjeros, así como la política de colaboración realizada por un importante sec-



**Pemex, empresa constantemente sometida a la “satanización” de políticos y medios de comunicación, producto del interés por privatizar la paraestatal.**

tor político y económico mexicano, han ocasionado un serio deterioro de los sectores productivos de nuestro país, en el sistema de comunicaciones, de servicios y en el manejo financiero. En el proceso de desmantelamiento de la economía nacional y de privatización masiva, se ha ejercido una fuerte presión para que se realice la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual no se ha conseguido hasta el momento, entre otras razones, debido a las restricciones que existen en la Constitución de la República: “El liberalismo económico en 23 años avanzó, pero no ha logrado, a pesar de todo lo hecho, modificar los fundamentos de la Constitución y la tarea pendiente (...) es terminar con esto” (Decelis, 2006:12). Por ello se hace tanto énfasis en convencer a la población del país de la necesidad de llevar a cabo las reformas estruc-

turales, para, supuestamente, modernizar el país, inyectarle un empuje económico inusitado, y ponerse a tenor con los tiempos que corren en el mundo; sin embargo, “cuando el gobierno (neoliberal) habla de las reformas estructurales, se refiere a cambios constitucionales que exige el Consenso de Washington sobre la desregulación, lo que significa solamente ‘menos Estado como sea posible’. Las reformas constitucionales (...) sobre todo el artículo 27, son para eliminar la actividad exclusiva del Estado Mexicano sobre sus industrias estratégicas cancelando, con ello, las posibilidades de un desarrollo sustentable en lo económico y con justicia social en lo político” (Decelis, 2005:13).

Pemex es una paraestatal que se encuentra constantemente sometida a crítica en los medios de comunicación y en los discursos

de los políticos dirigentes de México; se le considera una empresa que comienza a desfasarse de los procesos internacionales al impedir la inversión extranjera en todos los rubros de la cadena productiva; la falta de inversión, se argumenta, provoca el constante deterioro de las instalaciones y frena el crecimiento en la inversión, explotación y exploración: “Pemex se sataniza y se insiste en que no hay recursos públicos para mantenerlo, que su producción es ineficiente y que solamente con inversión extranjera y tecnología de punta se salvará. Naturalmente, esta política perversa es persistente no sólo con Pemex, sino además con la Comisión Federal de Electricidad” (Decelis, 2005:11), sin embargo, la Secretaría de Hacienda obtiene el 42% del gasto corriente de estas dos paraestatales, lo que ha servido para mantener las “finanzas sanas”. Podemos ver, en este sentido, la existencia de un doble discurso: la condena de improductividad o carga que representan, y por otro lado, el uso de los recursos para mantener la estabilidad macroeconómica.

¿Qué es lo que ocurre, en realidad, con Pemex? Si se realiza un comparativo con las principales empresas extractoras de petróleo como Exxon, BP, Amoco, Royal Duth, Shell y Eni, se puede comprobar que “Pemex es la empresa más rentable del mundo, ya que su costo de operación es el más bajo y, por lo tanto, le da una mayor rentabilidad” (Decelis, 2006: 7). Además, se debe indicar que los gastos de operación de Pemex se distribuyen en mano de obra directa (personal sindicalizado), mano de obra indirecta (personal administrativo), materia prima (petróleo consumido) y energía

para transformar lo vendido; dentro de estos gastos, los salarios y las prestaciones utilizados para pagos administrativos resultan mayores que los llevados a cabo para los trabajadores. Pero la paraestatal se encuentra en una situación paradójica, en la cual pareciera que el Estado hace lo posible por asfixiarla: “Como Pemex, dice Hacienda, no tiene dinero, no se le permite que haga alguna inversión, no importa que se quemem 200 millones de pies cúbicos por día de gas, cuyo valor supera los 350 millones de dólares al año”, tampoco interesa “que las plantas de Pemex deterioren por falta de presupuesto para mantenimiento (...) los ductos que se explotan con frecuencia inusitada, son noticia por los daños que causan a los ciudadanos y a su patrimonio, y desde luego por las enormes pérdidas que sufren las instalaciones petroleras por falta de mantenimiento, el cual cuando se realiza lo hacen gentes inexpertas porque el objetivo es volver inviable la industria petrolera mexicana” (Decelis, 2005:12). Este ánimo por cercar Pemex, pese a ser una empresa sumamente rentable a nivel internacional y que significa uno de los mayores ingresos económicos para el Estado mexicano, se puede indicar con una serie de políticas que se dirigen hacia (o en contra) de la paraestatal: desde hace 22 años no se incrementa la refinación y la disminución de la petroquímica alcanza el 80%; la producción de amoniaco, en la cual México tenía el primer lugar mundial, con una producción de 5 millones de toneladas anuales, en la actualidad se encuentra a un 10% de su capacidad productiva; las reservas de crudo, estimadas para 42 años, debido a una explotación

irracional se estiman en la actualidad para una vida de 10 años.

Otro elemento que perjudica seriamente es que Pemex se ve obligado a vender su producto a un “Costo de Oportunidad”; “esto significa el más alto que exista en el mercado, al cual estamos unidos, y se escoge el de Texas que es el más caro del mundo. Por lo tanto, los productos petroleros, empezando por el gas, Pemex lo vende a este precio, que por ser tan alto obliga a las empresas a parar, ya que es más barato importar que producir” (Decelis, 2006:9). Existe otro elemento esencial de este cuadro; Pemex se dedica a la extracción y a la venta del petróleo crudo como materia prima, limitando así las posibilidades de diversificación de los productos y con ello el valor que encierran por el proceso de trabajo invertido; si el petróleo se procesara se realizaría una transformación del producto, “cuyo valor agregado por barril de petróleo crudo es de sesenta veces más (...) al transformarlo en un producto terminado como puede ser el vestido, las llantas y todos los derivados del plástico (en vez del) simplismo de exportar una materia prima estratégica sin ningún valor agregado (...) por otro lado, la ‘gran exportación’ que se hace de petróleo crudo no deja ningún beneficio a nuestro país. Por ejemplo, en 2004 fue el valor más alto de la historia con 24 mil millones de dólares, pero la importación de Pemex de petrolíferos y gasolinas fue de 6 mil millones de dólares, y la petroquímica que ya no produce Pemex superó los 18 mil millones de dólares” (Decelis, 2005:5).

¿Cómo entender este manejo de las finanzas y de los procesos productivos de Pemex sino para

preparar el camino para la privatización? En 2005, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, expresó: “En México, el artículo 27 constitucional prohíbe que inversionistas internacionales se involucren en ese recurso (el petróleo) y la empresa nacional petrolífera de México presiona para ver si esa prohibición puede ser eliminada (...) porque se hace creer en la necesidad de capital y experiencia para perforar en aguas profundas del Golfo de México, donde se ha supuesto la existencia de enormes cantidades de petróleo” (Decelis, 2005:13). Las presiones para privatizar Pemex se deben, en este sentido, no a la eventual quiebra de la empresa, sino a su capacidad de generación de riqueza, la cual es codiciada por empresarios extranjeros. A ello, se debe sumar el interés que despierta el valor estratégico de la materia prima en cuestión y que atañe directamente a la soberanía de los Estados nacionales; sobre este tema puede apreciarse la oposición del Congreso norteamericano de la venta de la petrolera Unocal a una empresa China, argumentando que, pese a ser mayor la oferta que la de una compañía americana, “el petróleo y el gas son ‘activos estratégicos’ y que la compra de la empresa (...) ‘amenazaría con perjudicar la seguridad de los Estados Unidos’” (Decelis, 2005:14).

Así, queda claro que los recursos energéticos forman parte esencial del mantenimiento de la soberanía, y la oposición a la privatización de Pemex no es, por lo mismo, un viejo esquema de nacionalismo ni un obstáculo para el crecimiento de México, sino parte clave en la defensa económica y política de nuestro país. ■